



Aprobada en sesión del Pleno
de 26 de diciembre de 2011,
con observaciones.

ACTA No. 221-TCE-2011

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
CORRESPONDIENTE AL LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2011**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de diciembre de dos mil once, siendo las once horas y diez minutos, sesiona el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, con la asistencia de las señoras juezas Dra. Ximena Endara Osejo, Presidenta, Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta y Dra. Alexandra Cantos Molina y, de los señores jueces Dr. Arturo Donoso Castellón y Ab. Douglas Quintero Tenorio.

Actúa en la Secretaría el abogado Fabián Haro Aspiazu, Secretario General.

Se constata el quórum reglamentario y se aprueba el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Pleno del Organismo correspondiente al lunes 05 de diciembre de 2011;
2. Conocimiento y resolución respecto de la necesidad de reformar el Reglamento para el pago de honorarios de las juezas y jueces suplentes en el ejercicio de sus actividades jurisdiccionales y administrativas;
3. Conocimiento y resolución respecto de los mecanismos necesarios para implementar la prestación de servicios a favor del personal del Tribunal Contencioso Electoral, establecidos en la LOSEP;
4. Lectura de Comunicaciones; y,
5. Asuntos Varios.

PRIMER PUNTO:

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL LUNES 05 DE
DICIEMBRE DE 2011.**

Por encontrarse presentes únicamente dos de los tres jueces que asistieron a la sesión del día lunes 05 de diciembre de 2011, y acogiendo la observación



del doctor Arturo Donoso, se suspende la aprobación del acta hasta que se incorpore la doctora Alexandra Cantos.

SEGUNDO PUNTO:

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LA NECESIDAD DE REFORMAR EL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LAS JUEZAS Y JUECES SUPLENTE EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS.

La señora Presidenta manifiesta que se ha entregado a las señoras Juezas y señores Jueces una carpeta que contiene la información sobre este y otros temas.

El abogado Douglas Quintero considera que el Reglamento para el pago de honorarios de las juezas y jueces suplentes en el ejercicio de sus actividades jurisdiccionales y administrativas no está ajustado a plenitud a un mandato constitucional, que determina que el Tribunal está integrado por diez jueces, cinco titulares y cinco suplentes; en el momento que un juez titular por obvias razones no pueda estar presente, el juez suplente que lo reemplaza asume todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que genera éste cargo. Se ha venido discutiendo el tema del abogado Juan Ycaza y que no encuentra mecanismos para el pago de viáticos, lo que debería pagarse es la residencia, la movilidad y lo que concierne a los salarios más beneficios de ley que tiene como derecho el juez titular.

El doctor Arturo Donoso expresa que este tema tiene que ver con todo lo que son los emolumentos del sector público, por tanto hay que armonizar la autonomía que eventualmente pueda tener el Tribunal Contencioso Electoral con normas legales que son de general aplicación en todo el sector público. Coincide con lo manifestado por el abogado Douglas Quintero de que no cabe pagar viáticos, ya que los mismos son para cuando el funcionario, que tiene su trabajo en un lugar, por razones de una comisión tiene que trasladarse fuera de él. Si el juez suplente está a cargo del despacho de un juez principal, y tiene que salir a juzgar a las provincias, ahí tiene derecho a viáticos, de lo contrario no.

La doctora Amanda Páez señala que ha efectuado una revisión de la normativa que se aplica para el pago de honorarios de las juezas y jueces, así como de los viáticos. El Reglamento establece el pago para dieta, dieta por sesión, el pago por actividad jurisdiccional y el pago por honorarios cuando se trata de hacer un estudio. Considera que debería reformarse el Reglamento respecto de los valores a pagarse a los jueces suplentes, aplicándose el principio constitucional que a igual trabajo igual remuneración, porque el juez suplente asume el Despacho con todas las obligaciones y derechos, que en este caso sería por dieta o por sesión, por honorario o por actividad jurisdiccional. Por otro lado, en relación a los viáticos, se encuentra la resolución de la SENRES No. 2009-80, en donde se dice que viático es el valor que se paga a diario a los



servidores, en cuyo artículo 4 se debe considerar lo siguiente: Los servidores de las instituciones y empresas del estado reciben viáticos por el cumplimiento de servicios institucionales cuando tienen que pernoctar; y, el que tengan que trasladarse fuera del domicilio y lugar habitual del trabajo. Reflexiona que este es el caso del abogado Ycaza, quien vive fuera de su lugar de trabajo, ya que su lugar de trabajo está en la ciudad de Quito, mientras que su domicilio está fuera del lugar del trabajo, entonces hay una ausencia de norma para éste caso, pero él está trasladándose a cumplir su trabajo en Quito. Añade que ha realizado unas recomendaciones con relación al memorando 2581 sobre el saldo presupuestario; sobre el proceso de pago de anticipos y liquidación de viáticos en el Tribunal; sobre el proceso actual y propuesto de adquisición y pago de pasajes, y el proceso actual y propuesto de pago de horas extraordinarias y suplementarias en el Tribunal Contencioso Electoral. Sugiere la conveniencia de que la Unidad de Sistemas del Tribunal haga una demostración del sistema tramitológico de asuntos administrativos y del sistema de causas, para su aprobación por el Pleno del Tribunal.

La señora Presidenta expone que el análisis de este tema es importante para que los señores jueces principales y suplentes no tengan la idea equivocada de que es el Tribunal o la Presidencia los que no quieren pagar los viáticos. Añade que la suma de los valores que podrían percibir los señores jueces suplentes que vivan fuera de Quito no debe ser superior a la remuneración que perciben los jueces, y que la Directora Administrativa Financiera le ha indicado que existe una norma que impide que un juez pueda ganar más que otro juez haciendo el mismo trabajo. Para resolver este asunto, había propuesto al abogado Ycaza sobre la conveniencia de que se formule una consulta a la Contraloría General del Estado, al inicio estuvo de acuerdo pero posteriormente se opuso. Continúa su intervención señalando que es su interés que ningún Juez se sienta lastimado en sus intereses, ya que el juez suplente tiene que ser tratado de la mejor manera, y que hasta tanto ha preferido dejar ésa consulta a la Contraloría en suspenso hasta contar con más criterios. Indica que hay otro problema que tiene que ver con el hecho de que cuando se llama al Pleno a los jueces suplentes y vienen a conocer una causa, se les paga calculando los folios por cada causa, por lo que medir por folios el trabajo de los jueces parecería no muy adecuado. Así mismo, señala que es necesario que el Tribunal proporcione un espacio adecuado para los señores jueces suplentes y de ser necesario, una secretaria para que les asista. Finalmente, propone que se integre una comisión que esté dirigida por el abogado Douglas Quintero, más los servidores públicos que considere pertinentes.

El abogado Douglas Quintero explica que si una persona vive en Guayaquil y tiene que trasladarse a trabajar en Quito, el Estado debe reconocer un bono de residencia y el pago del medio de transporte. Anteriormente ya había expresado su desacuerdo con el Reglamento con los significados que se tiene sobre el pago de dietas, el pago por folio y el pago de la remuneración. Pregunta a la señora Presidenta por qué se detuvo el tema de la consulta, más allá de lo que había dicho el abogado Ycaza, porque de ello dependería si es viable pagarle o no lo que reclama.



La señora Presidenta responde que la consulta la detuvo en consideración a que el abogado Ycaza no estaba de acuerdo con los términos en los que estaba planteada y porque no contaba con el criterio de los jueces, sin embargo, acudió en compañía del Director de Asesoría Jurídica hasta la Contraloría General del Estado, donde el doctor Carlos Burgos, funcionario de esa institución, les dijo que ese Organismo de Control se estaba cuidando de no interferir con las opiniones del Ministerio de Relaciones Laborales. Advierte que en la Ley Orgánica del Servicio Público no se contempla el pago de dietas ni de honorarios.

Al efecto, el Pleno del Organismo adopta la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN No. 792-12-12-2011: Integrar una comisión que la presidirá el abogado Douglas Quintero Tenorio, Juez principal, con el fin de elaborar un proyecto de reformas al “Reglamento para el pago de honorarios de las juezas y jueces suplentes en el ejercicio de sus actividades jurisdiccionales y administrativas”, a la que se sumará el personal institucional que así se lo considere.

Al haberse incorporado la doctora Alexandra Cantos a la sesión del Pleno, la señora Presidenta consulta a las señoras juezas y señores jueces acerca de continuar con la aprobación del acta correspondiente al lunes 5 de diciembre de 2011.

Al efecto, el Pleno del Organismo adopta la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN No. 793-12-12-2011: Aprobar el acta No. 220 de la sesión ordinaria del Pleno del Organismo correspondiente al lunes 5 de diciembre de 2011, con las observaciones de forma propuestas por la señora Presidenta, y el voto salvado de la doctora Alexandra Cantos Molina y el doctor Arturo Donoso Castellón, por no haber estado presentes en la sesión.

TERCER PUNTO:

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO DE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A FAVOR DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL, ESTABLECIDOS EN LA LOSEP.

La señora Presidenta manifiesta que la Ley Orgánica del Servicio Público no contempla plazos para la implementación de varias prestaciones sociales, hay normas según las cuales únicamente puede hacerse aquello que se ha solicitado en el Presupuesto y consta en la Planificación Estratégica de la Institución, las señoras auditoras, representantes de la Contraloría General del Estado, han señalado que el Tribunal debe contar con su planificación institucional. Hasta el momento, no se conoce como está aprobado el



presupuesto para el próximo año, pero que con lo que se había presupuestado el Pleno debe decidir acerca de los mecanismos necesarios para implementar las prestaciones y su orden de prioridad. Participa que se encuentra preocupada por la calidad del servicio de alimentación que se proporciona al personal del Tribunal, lo que ha concitado cierto malestar entre los servidores. Indica que en el Ministerio del Interior no hay restaurante ni cafetería, que se otorga cien dólares mensuales por concepto de comida a sus funcionarios; la Contraloría tiene un servicio que les presta la alimentación, al igual que el Consejo Nacional Electoral. De igual manera, hay un asunto que no está presupuestado y tiene que ver con el uniforme. Otro problema que tiene el Tribunal es en relación al servicio de transporte, recuerda que se ha celebrado un contrato con una cooperativa de transporte para hacer los diferentes recorridos, pero que el recorrido que traslada a los funcionarios al sur de la ciudad, en varias oportunidades el señor chofer del bus se detiene en un determinado tramo y ahí les paga un taxi a las personas que todavía les falta completar su recorrido hacia su domicilio, con lo que se pone en riesgo la seguridad especialmente de las mujeres. Las servidoras y servidores de éste Tribunal tienen derecho a gozar de estas prestaciones dentro de las mejores condiciones, y en la alimentación se paga cinco dólares con lo que sería suficiente para que el almuerzo sea satisfactorio. Tampoco está contemplado en la LOSEP el establecimiento del dispensario médico, pero que de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, es posible que el Tribunal cuente con un médico del IESS dado el número de trabajadores que laboran. Otro tema es la guardería que de acuerdo a los informes que se tiene es posible hacerlo. El único inconveniente para la aplicación de estas prestaciones en el Tribunal es que se recorte el presupuesto y no puedan moverse las partidas presupuestarias para llenar aquello que no está contemplado.

La doctora Amanda Páez considera que la misma importancia que se está dando al Reglamento de pago de honorarios a las señoras juezas y señores jueces del Tribunal, merece el tema de las prestaciones que es también un asunto de derechos, por lo que igualmente debe conformarse una comisión para su examen. Manifiesta que a su Despacho han llegado varias quejas en relación con el asunto del transporte y de la comida. La decisión que se tome de parte del organismo tiene que ver con el cumplimiento del derecho a la alimentación que está dado por disposición legal, sea que se entregue el dinero para que los funcionarios elijan dónde recibir la alimentación fuera del Organismo o traigan su comida, en cuyo caso lo que se hace es destinar un espacio en donde se ubiquen muebles y unos microondas para que preparen los alimentos; Cualquiera de los modos que opte el personal, está dentro del cumplimiento del derecho a la alimentación. No hay una investigación adecuada sobre los recorridos que realiza el transporte contratado para los servidores, lo que la señora Presidenta hace conocer es un asunto que pone en riesgo a las personas que se trasladan de un transporte a otro, y corresponde al Tribunal cumplir lo que dice la Ley de Seguridad Social en cuanto a riesgos porque ya se estaría en el campo de los riesgos del trabajo. Sugiere que se conforme otra comisión para hacer un análisis y tener la información para tomar la decisión que más convenga a los intereses de los trabajadores.



El abogado Douglas Quintero felicita a la señora Presidenta por informarles de los acontecimientos que afectan a los servidores del Tribunal y que habría que revisar el contrato de transporte, porque la responsabilidad de la empresa es cumplir con el recorrido contratado, no los puede dejar a expensas por más que les dé el servicio de un taxi, se puede sancionar al conductor o rescindir el contrato. Sobre la comida es un tema que difícilmente se podrían poner de acuerdo, pero que se puede encontrar un servicio no óptimo pero sí bueno. Respecto de la guardería y del servicio médico, que la comisión investigue cuántos servidores y servidoras hay, cuántas mujeres en estado de gestación o que tienen niños menores, dependiendo de ello se vuelve obligatorio el tema de la guardería.

La señora Presidenta propone que la doctora Amanda Páez se haga cargo de la comisión de las prestaciones sociales, con el apoyo de los funcionarios que crea conveniente.

Al efecto, el Pleno del Organismo adopta la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN No. 794-12-12-2011: Integrar una comisión que la presidirá la doctora Amanda Páez Moreno, Jueza Vicepresidenta, con el objeto de establecer los mecanismos para la implementación de las prestaciones de servicios establecidas en la LOSEP, a la que se sumará el personal institucional que así se lo considere.

CUARTO PUNTO:

LECTURA DE COMUNICACIONES.

No existen comunicaciones para conocimiento del Pleno.

QUINTO PUNTO:

ASUNTOS VARIOS.

Por haberse agotado los puntos constantes en el orden del día, la señora Presidenta agradece por la participación a las señoras juezas y a los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral y clausura la sesión siendo las doce horas y ocho minutos.

Dra. Ximena Endara Osejo
PRESIDENTA DEL TCE

Ab. Pabían Haro Aspiazu
SECRETARIO GENERAL